



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO NRO. 35

AUTOS: "PALAVECINO, ALEJANDRA FABIANA-4- C/ SICOMED S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE - ACCION CIVIL"

EXPTE. NRO.: 71528/17

SENTENCIA DEFINITIVA N°: 16.397

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2025.-

VISTOS:

Esta causa seguida por **PALAVECINO, ALEJANDRA FABIANA** contra **SICOMED S.A.** y **ASOCIART ART SA** por acción civil en estado de dictar sentencia.

I.- La actora denuncia haber comenzado a laborar bajo dependencia de la accionada **SICOMED S.A.** en fecha **02/02/2001** como **enfermera** (CCT 122/75).

Describe las tareas y las áreas en las que laboró, denuncia un salario de **\$10.167,37** y sostiene que la relación de trabajo se extinguió el **15/12/16** por denuncia de contrato de trabajo.

Refiere que durante toda la relación laboral padeció lumbalgias medicadas con antiinflamatorios.

Relata que en febrero de 2015 comenzó con licencias por los dolores en su columna lumbar y que el 17/03/15, por informe de RMN, se le diagnosticó: *"A nivel L5-S1 mostró un disco deshidratado con abombamiento difuso del anillo fibroso de disposición paramediana izquierda con proyección intraforamidal. Hipertrofia de facetas y ligamentos amarillos. A nivel L4-L5 muestra un disco deshidratado con pérdida de la morfología cóncava posterior"*.

Sostiene que realizó la denuncia el **27/04/15** ante la ART demandada toda vez que su enfermedad –según alega- tiene carácter laboral, pues se desencadenó como consecuencia de las tareas realizadas a favor de su empleadora durante toda la relación de trabajo. Afirma que la ART rechazó la denuncia con fecha 15/05/15. Asimismo, postula que tanto la Comisión Médica Jurisdiccional n° 10 como la Comisión Médica Central rechazaron el reclamo de la actora por ser las patologías de carácter inculpables.

Afirma que como consecuencia de las tareas de esfuerzo realizadas a favor de su empleadora, sufre un 20% de incapacidad física y un 10% de incapacidad psicológica.

Funda su derecho en las disposiciones de los arts.512, 1.109, 1.113 y 1074 del Código Civil y en el art. 75 LCT. Adjunta documental.

Cita doctrina y jurisprudencia que entiende análoga al caso de autos.

Finalmente, practica liquidación en los términos de la art. 1074, 1113 y concordantes del Código Civil, ofrece su prueba y solicita se haga lugar a la demanda con expresa imposición de costas.



II.- A fs. 67/76 se presenta **ASOCIART ART SA**, y responde la acción incoada en su contra, negando los hechos expuestos en la demanda, la responsabilidad endilgada y fundada en el derecho común. Reconoce el contrato de afiliación vigente con **SICOMED S.A.**

Acompaña copia simple de la denuncia que recibió por parte de la actora.

Afirma que resulta improcedente el reclamo entablado por la parte actora con fundamento en el derecho común.

Cita frondosa doctrina y jurisprudencia, la cual entiende análoga al caso de autos.

Rechaza el fundamento de la acción en el derecho común y en la LCT, pide se desestime la demanda en su contra con costas e impugna la liquidación practicada, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda con costas.

III.- A fs. 116/131 se presenta **SICOMED S.A.** y responde la acción incoada en su contra. Interpone excepción de prescripción.

Niega el resto de los hechos alegados en la demanda.

Afirma que resulta improcedente el reclamo entablado por la parte actora a través de los arts. 1113 y 1109 del derecho común.

Rechaza el fundamento de la acción en el derecho común, pide se desestime la demanda en su contra con costas e impugna la liquidación practicada, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda con costas.

Recibida la causa a prueba, quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I. En primer término, corresponde tratar la excepción de prescripción interpuesta por la codemandada **SICOMED SA**, quien plantea que al momento de la interposición de la demanda (02/11/2017) la acción se encontraba prescripta, tomando como fecha de toma de conocimiento el 24/11/2014.

Adelanto que corresponde desestimar la excepción planteada por la codemandada porque surge de las constancias de autos que la actora denunció su patología e intimó a la ART demandada con fecha **27/04/15** (fs. 65). En razón de ello, corresponde tomar tal fecha como punto de partida del cómputo de prescripción. Tal intimación suspendió el curso de la prescripción por un año (art. 3986 CCCN) por lo que a la fecha de interposición de la demanda -02/11/17- la acción no se encontraba prescripta, máxime cuando con fecha 23/06/16 se celebró la audiencia ante el SECLO.

II.- Que teniendo en cuenta la forma en que se encuentra trabada la *litis*, corresponde analizar la prueba producida en la causa a los fines de determinar si las partes adecuaron su conducta probatoria a las reglas que rigen la carga de la prueba (cfr. art. 377 del CPCCN).

Pues bien, en primer lugar analizaré la prueba pericial médica. En tal sentido, la Dra. Lescano Carrión, Isabel del Carmen examinó a la actora y presentó su dictamen médico e informó:

“Columna lumbosacra Pérdida de la lordosis fisiológica, se observa cicatriz eutrófica, consolidada, medial de más de 5 cm. (2016) Al momento del examen presenta marcha eubásica, refiere dolor a la bipedestación prolongada, no puede realizar esfuerzos. Movilidad activa/pasiva: flexión 70° extensión 20° rotación D.I. 20° inclinación D.I. 10°. Reflejos presentes,



disminuídos. Maniobras de Lasegue y Wasserman, negativas. Estudios médicos Rx lumbar. Dr. Javier Devani MN 134.345 – 29/06/23 Rectificación de la lordosis lumbar. Actitud escoliótica. Anterolistesis grado I de L5 sobre S1. Osteofitos anteriores y marginales. Cambios postquirúrgicos con medios de fijación transpedicular a nivel L5 S1, a valorar según antecedentes No se observan otras lesiones osteoarticulares significativas. Estructuras de partes blandas dentro de límites normales. RMN col. lumbosacra. Rectificación de la lordosis lumbar. Escoliosis sinistroconvexa. Osteofitos anteriores y marginales. Cambios postquirúrgicos con medios de fijación transpedicular a nivel L5 S1, a valorar según antecedentes. Disminución de la intensidad T2 de los discos intervertebrales L4-L5 L5-S1. No se aprecian protrusiones significativas de los anillos fibrosos. La cola de caballo no presenta alteraciones significativas. El cono medular finaliza a nivel de L1. Estructuras del arco posterior dentro de límites normales. Grupos musculares de trofismo adecuado. EMG miembros inferiores. Dra. Patricia Egizi MN 73.106 Conclusión: EMG neurógeno crónico con compromiso radicular deficitario, en forma generalizada en miembros inferiores, sin denervación actual. Estudio Psicodiagnóstico. Lic. Pamela Frappa MN 65.373 – 24/08/23 Se administraron las siguientes técnicas: Entrevista, Test de Bender, HTP, Persona bajo la lluvia, Escala de Ansiedad SCL 90-R. Conclusión: Trastorno mixto ansioso depresivo F 41.1 DSM IV (...) **CONCLUSIÓN IPP: 20% (Hernia de disco operada con secuelas moderadas) + 10% RVAN Grado II Baremo LRT**” (v. pericia médica del 20/09/23).

Al contestar las impugnaciones efectuadas por las partes confirmó sus conclusiones, agregó los factores de ponderación: “IPP: 20% (Hernia de disco operada con secuelas moderadas) + 10% RVAN Grado II. Baremo LRT. Factores de ponderación Dificultad alta 20% 6% Amerita recalif. 10% 3% Edad mayor 31 a. 2% Total 11% IPP con factores: 41%. Baremo LRT” y con relación al nexo de causalidad entre la afección columnaria y las tareas, la experta agregó: “Se considera que por el tipo de actividades laborales de la actora durante tanto tiempo, que implicaba esfuerzo para la higiene y movilización de pacientes en las áreas críticas donde trabajaba pudieron facilitar su patología columnaria.” (v. presentación del 06/10/23).

Por otro lado, de la pericia contable se constata que: “Según surge de Simplificación Registral AFIP, la fecha de ingreso de la actora es el 19/02/2001 y la fecha de egreso el 29/12/2016. La categoría laboral registrada es Enfermera/o de Piso o Consultorios Externos-Personal Técnico y Servicios Complementarios. La actora figura en el libro especial art.52 de la demandada. Los importes registrados en dicho libro, son coincidentes con los recibos de haberes de la actora” (v. pericia contable del 01/11/24).

Examinados ambos elementos de juicio, considero que los peritajes se encuentran realizados de conformidad con las pautas establecidas en el art. 472 del CPCCN, contienen una explicación detallada, se encuentran fundados en consideraciones científicas y estudios complementarios. Por todo lo expuesto, le otorgo pleno valor probatorio y convictivo a los peritajes en análisis (cfr. arts. 386 y 477 del C.P.C.N.).

Considero –además– que se encuentra acreditado en autos que **la actora realizó tareas de enfermería** –con los esfuerzos físicos que ello conlleva con relación a la movilización de pacientes– **durante quince años** por lo que considero que el nexo de causalidad entre la afección columnaria de la accionante se encuentra causalmente vinculada con el hecho de autos (art. 377 CPCCN).

Ahora bien, en cuanto a las conclusiones de la perito respecto a la determinación de la incapacidad psicológica de la accionante y su vinculación causal con los hechos de autos, es sabido que no es la galeno la llamada a decidir si entre la incapacidad que pueda evidenciar el trabajador y el



hecho generador existe relación causal pues los médicos no asumen ni podrían hacerlo, el rol de los jueces en la apreciación de la prueba con relación a los hechos debatidos en la causa. Ello significa que, sin perjuicio del valor que quepa asignar a la opinión de la experta en cuanto a si es factible o no médicamente que una cierta afección guarde relación con un cierto tipo de hecho, en los casos concretos debe acreditarse según corresponda cuáles han sido específicamente sus características, a fin de que el juez determine -considerando claro está la opinión médica- si está probada o no la vinculación causal o concausal entre el infortunio y la incapacidad.

En tales términos, la perito no consideró los términos del Baremo de la ley 24.557 (decreto 659/96) –el que debe ser utilizado como como pauta de ponderación objetiva en las acciones con fundamento en el derecho común (CSJN, autos: “*Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A. y otro s/ accidente – acción civil*”, sentencia del 11/06/2019, Fallos: 342:1017)- cuya Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Baremo según decreto 659/96) establece que serán evaluadas las lesiones psiquiátricas que deriven de enfermedades profesionales que figuren en el listado, diagnosticadas como permanentes o secuelas de accidentes de trabajo. Así, dispone que las enfermedades psicopatológicas no son motivo de resarcimiento económico porque, en la casi la totalidad de ellas, tienen una base estructural. Por ello dispone que los trastornos psiquiátricos secundarios o accidentes por traumatismo craneo-encefálicos y/o epilepsia post-traumática, (como las personalidades anormales adquiridas y las demencias post-traumáticas, delirios crónicos orgánicos, etc.) deben ser evaluados únicamente según el rubro desorden mental orgánico post traumático (grado I, II, III o IV) y solamente serán reconocidas las reacciones o desorden por estrés post traumático, las reacciones vivenciales anormales neuróticas, los estados paranoides y la depresión psicótica que tengan un nexo causal específico relacionado con un accidente laboral, debiéndose descartar todas las causas ajenas a esta etiología, como la personalidad predisponente, los factores socioeconómicos, familiares, etc.

Por dicha razón, en definitiva, es el tribunal el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N. En ese orden de ideas, ello no resulta suficiente para acreditar el daño psíquico alegado, por lo que no hare lugar a la alegada minusvalía psicológica (en igual sentido Sala V “*LEGIDOS SEBASTIAN EZEQUIEL C/ GALENO A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL*” SD 82442 26/2/19).

Por lo expuesto y tal como adelante, no haré lugar al porcentaje de incapacidad psicológico determinado por la Galeno respecto a la totalidad de incapacidad psicofísica otorgada de la T.O.

Al respecto concuerdo con lo manifestado por la Sala IV que ha expresado: “*Las apreciaciones del perito médico respecto de la vinculación causal o concausal de la incapacidad con el factor laboral están basadas en un razonamiento lógico-científico que necesariamente debe ser confrontado con los restantes elementos de juicio reunidos en la causa.- Establecer la existencia o no de la relación de causalidad o concausalidad entre dos o más hechos exige una valoración de índole jurídica en cuya formulación la prueba pericial médica tiene fundamental importancia, pero no es la única a considerar*” (cfr. C.N.A.T., “*Asad, Juan Carlos c/ Central Cinematográfica S.A. s/ Accidente*”, Sala IV, Sent. 67.369 del 11.5.92, énfasis agregado).

En razón de todo lo anterior, propicio determinar la incapacidad total de la actora, vinculada al hecho de autos, en el 26,4% de la t.o. (20% física + 6,4% factores de ponderación).



III. Sentado lo expuesto, corresponde examinar la procedencia de la responsabilidad civil endilgada a la empleadora del actor.

Sobre tales bases, memoro, la actora interpuso un reclamo con fundamento en el derecho común contra la empleadora, convocada por ser la dueña de la “cosa o actividad riesgosa” que provocó el daño.

En tal sentido, resulta imprescindible establecer que “la cosa viciosa o riesgosa” a la que se refiere el art. 1113 del Código Civil, norma aplicable a la fecha de toma de conocimiento de autos, no se circunscribe únicamente a la materialidad de un elemento en particular, sino que también se refiere a todo un establecimiento, explotación, empresa o incluso también actividad (en igual sentido, v. Sala VII CNAT en los autos: “Mamani, Graciela Beatriz c/ Lucofi S.A. y otro s/ Despido”, S.D. 39.000 del 14.2.06).

En tal orden de ideas, reitero, el nexo de causalidad entre la afección columnaria de la actora y las tareas realizadas a favor de **SICOMED SA** se encuentra acreditado, pues no se encuentra discutido que la actora se desempeñó como enfermera por un plazo de quince años.

En tal marco, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, no puede prescindirse del principio objetivo que emana del art. 1113 párrafo segundo del Código Civil en el que se funda la demanda. En ese contexto “*basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para quede a cargo de la demandada como dueño o guardián del objeto riesgoso demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder*” (CSJN, “Rivarola Isabel Angélica c/ Neumáticos Goodyear S.A.” sentencia del 11 de julio de 2006 y sus citas, Fallos: 329:2667). En este sentido, la empleadora no produjo ningún elemento de prueba a los efectos de acreditar los extremos señalados.

Por lo anterior, considero que la empleadora –al ser dueña de la cosa y actividad riesgosa- resulta civilmente responsable por los daños que el accidente –reitero, reconocido en autos- produjo en la salud psicofísica de la actora (**conf. Art. 1113 CC**).

Sentado ello y para calcular un resarcimiento reparatorio integral, el suscripto comparte lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que “*...a los fines de establecer el daño emergente, el valor de la vida humana no debe ser apreciado con criterio exclusivamente económico, sino mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, pues el valor vital de los hombres no se agota en la sola consideración de aquellos criterios...*” (Fallos 252:243, 503:820).

Y además que la doctrina de la CSJN, en los autos "Arostegui, Pablo Martin c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL", dijo que “*...el a quo, so color de restitutio in integrum, estimó el resarcimiento por el daño material del derecho civil también mediante una tarifa. Más todavía; de una tarifa distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análoga en su esencia pues, al modo de lo que ocurre con ésta, sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada "total obrera" y de su repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquélla. Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a éste. Al respecto, la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que "el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales", ya que no se trata "de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia*



compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" ("Aquino", votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Higton de Nolasco; Fallos: 327:3753; 3765/3766, 3787/3788 y 3797/3798, y sus citas; y "Díaz", voto de la jueza Argibay, Fallos: 329:473, 479/480 y sus citas).

Y siguiendo este razonamiento la Corte también ha expresado en diversos pronunciamientos vinculados, al igual que los citados anteriormente, con infortunios laborales en el contexto indemnizatorio del Código Civil, que la incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste *"un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc."*, y que, por el otro, *"debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de (la) actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable"* (Fallos 308:1109, 1115 y 1116). De ahí, que *"los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos - aunque elementos importantes que se deben considerar- no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio"* (Fallos: 310:1826, 1828/1829). Tampoco ha dejado de destacar que en el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance", cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos: 308:1109, 1117)".

Asimismo, se destaca que no cabe aplicar en la especie fórmulas matemáticas, pues más allá del derecho a ser resarcido en plenitud que emana del principio "alterum non laedere", de raigambre constitucional, la norma deja librada la determinación del monto a la prudencia de los jueces (ver art. 1084 del C. Civil; CNAT Sala VIII Expte n° 15235/02 sent. 34810 29/2/08 « Martínez, Eduardo c/ Provincia ART y otros s/ accidente acción civil").

De acuerdo a estos parámetros es menester tomar en consideración las características particulares de la causa, la edad de la actora a la fecha de la toma de conocimiento **27/04/15** (edad: **42 años**), el salario al momento del siniestro **\$11.376,35** (v. pericia contable), el tiempo de vida útil que le quedaría para desenvolverse en el mercado laboral, la secuela invalidante derivada de su labor que le ocasiona una incapacidad psicofísica parcial y permanente del **26,4%** de la T.O. y las eventuales dificultades para proseguir su carrera (cfr. doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de abril de 2008, "Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Plus y Compañía SRL"), elementos que permiten compensar los daños acreditados en autos y por los que aquí se reclama.

Frente a lo expuesto y tomando en cuenta tales premisas, juzgo equitativo fijar el quantum de reparación integral daño psicofísico en la suma de **\$950.000 que incluye todos los daños peticionados en autos** (cfr. art. 1078 del Código Civil y doctrina del fallo plenario de la CNAT nro. 243 "Vieytes, Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A." del 25/10/1982).

Así lo declaro.

IV. Ahora bien, resta expedirse con relación a la responsabilidad endilgada a la ART demandada. Observo de la contestación de demanda que la accionada declaró tener contrato de afiliación con la empleadora de la actora desde 01/08/2014 y que acompañó constancias de visita a la empresa SICOMED SA que no fueron desconocidas por la parte actora.



Sobre tales bases, y en atención a que la actora denunció la existencia de una enfermedad **que evolucionó desde su ingreso en el año 2001**, considero que no se encuentran acreditados en autos los presupuestos de la responsabilidad civil para condenar a **ASOCIART ART SA** con fundamento en el art. 1074 del CCN.

No existen elementos en la causa que demuestren que hayan mediado acciones u omisiones culposas, en los términos de los arts. 1109 y 1074 del Código Civil, que conlleven la responsabilidad civil de la aseguradora.

Ahora bien, y sin perjuicio del derecho invocado como fundamento del reclamo, adelanto que la acción habrá de prosperar en el marco de la ley 24557. *“Es dable resaltar que si bien el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas, tal limitación, sin embargo, infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde 'decir el derecho' (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit. Cabe recordar que, conforme lo ha puntualizado el Alto Tribunal en reiteradas ocasiones, el mencionado principio iura curia novit faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (Fallos: 329:4372; 333:828, entre otros). Más aún, “...es función de los jueces la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se les presentan, conjugando los enunciados normativos con los elementos fácticos del caso” (cfr. doctrina de Fallos: 315:158,992 y 1209, entre otros) – v. sentencia Sala I de la CNAT “COLMAN COLMAN ALFREDO RAMON C/ SUMINISTRA SRL y OTROS S/ ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL” del 09/12/21).*

Por lo anterior, considero que –habiendo reconocido la ART demandada el contrato de afiliación con la empleadora del actor y que recibió la denuncia del siniestro- debe responder dentro de los límites impuestos en la LRT.

En tal sentido, para el cálculo de la indemnización correspondiente a lo dispuesto por el art. 14 inc. 2.a) de la Ley 24.557, corresponde se tomará como IBM, el monto informado por el **perito contador de \$11.376,35** (v. pericia contable).

De acuerdo a ello, la actora sería acreedora de la indemnización que asciende a la suma de **\$246.346,73** toda vez que es la que prescribe el art. 14 inc. 2. a) de la Ley 24.557 (Ingreso base mensual $\$11.376,35 * 53 * 65/42 * 26,4\%$) = **\$246.346,73** y que dicho monto resulta superior al mínimo establecido en la **Resolución 6/2015**, que dando cumplimiento a lo previsto por el art. 8° de la Ley 26.773 ajustó por índice las prestaciones de los arts. 11, inc. 4, ap. a), b) y c); 14 inc. 2, ap. a) y b); y 15 inc. 2, de la Ley 24.557, y dispuso la vigencia de dichas actualizaciones por el período comprendido entre 01/03/2015 y el 31/08/2015 inclusive ($\$ 713.476 * 26,4\% =$ **\$188.357,66**).

Por otra parte, corresponde establecer la viabilidad del pago adicional previsto en el artículo 3° de la ley 26.773 al accidente laboral del caso, por lo que adicionándose el 20% de dicho total de: **\$49.269,35** y el adicional de pago único del art. 11 inc. 4 a) de **\$ 295.616,08**.

Por todo lo anterior, el monto de condena contra la ART demandada asciende a la suma de **\$295.616,08**.

V.- Omito analizar el resto de la prueba por no ser esencial para la dilucidación de las actuaciones, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que



el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estime conducentes para fundar sus conclusiones, absteniéndose de analizar aquellas cuestiones y argumentos utilizados que, a su juicio, no sean decisivos o que no estime conducentes para fundar sus conclusiones. (Conf. CSJN, 29.4.70, La Ley 139-617, 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal...Morello, Tº II – C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal).

VI. En lo que respecta a la aplicación de intereses, en reiterados pronunciamientos he adherido al criterio expuesto por la Sala VIII de la CNAT, en los autos “Villanueva Néstor Eduardo c/ Provincia ART. S.A. y otro” (Expte. 65930/2013, SD del 15/8/2024) y consecuentemente, dispuse la adición al monto de condena del CER, como interés moratorio, ello por los fundamentos allí expuestos.

Ahora bien, ante nuevas circunstancias de índole económica, habré de seguir los extremos articulados en el voto del distinguido jurista Dr. Victor Pesino -con adhesión de la catedrática Dra. María Dora González- al resolver la causa “Santander, Estela Beatriz C/ Tritestta S.R.L. y otros s/despido” (Expte. 39332/2019, SD del 06/08/25 del Registro de la Sala VIII de la CNAT), cuyos argumentos reproduzco y hago míos.

En este nuevo pronunciamiento, el Tribunal –en términos que comparto- ha establecido que “...*justo es reconocer que, desde hace más de un año, los índices que miden el costo de vida o la inflación, vienen mermando considerablemente, lo que permite vislumbrar que las tasas de interés están volviendo a cumplir con su función reguladora de la inflación, en una economía más estable. Desde esta óptica, no considero prudente mantener sine die la utilización del CER, como tasa de interés, por advertir que ese procedimiento puede llevar a la obtención de resultados desproporcionados, comparados con el poder adquisitivo de los créditos en la época en que se devengaron*” (v. voto del Dr. Pesino en “Santander, Estela Beatriz C/ Tritestta S.R.L. y otros s/despido”).

Por tales motivos, propongo que, desde la exigibilidad del crédito (27/04/15) hasta el 31 de diciembre de 2023 se aplique el CER como tasa de interés y, a partir del 1º de enero de 2024, al resultado que se obtenga se adicionen los intereses del Acta 2658 de la CNAT (tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas del Banco Nación), hasta el efectivo pago.

VII.– El resultado del pleito me lleva a imponer las costas a las demandadas vencidas (conf. art. 68 del CPCCN).

VII.- Para regular los honorarios tendré en cuenta el monto del litigio, mérito, importancia y éxito de los trabajos realizados, como así también lo normado por la Ley 21.839 (art. 38 L.O.) y concords. Ley 24.432 y que comprenderá la totalidad de los trabajos realizados. Las sumas correspondientes a los honorarios que se regularán deberán ser abonadas dentro del quinto día de firme la presente y para el caso de incumplimiento en su oportuno pago llevarán intereses (conf. Art. 768 del C. Civil y Comercial) a las tasas resultantes del Acta CNAT 2658. Asimismo y en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los letrados y peritos actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.



Por estas consideraciones, constancias de autos y disposiciones legales citadas, FALLO: 1) **Hacer lugar a la demanda por accidente incoada por PALAVECINO ALEJANDRA y condenar a SICOMED SA a abonar a la actora la suma de \$950.000 y a ASOCIART ART SA hasta cubrir el monto de la póliza de \$295.616,08** mediante depósito judicial y dentro del quinto día de notificada la liquidación que resulte del art. 132 de la L.O. con más sus intereses dispuestos en el considerando respectivo. 2) Imponer las costas a las demandadas vencidas (conf. art. 68 del CPCCN). 3) Regular los honorarios en forma conjunta y por todo concepto –incluida su actuación ante el SeCLO- de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en 40 UMA, los de la representación y patrocinio de las demandadas para todos sus letrados intervinientes en 30 UMA para cada una de ellas; y los honorarios del perito médico legista y perito contador en 3 UMA, para cada uno de ellos. Asimismo y en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los letrados y peritos actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase y oportunamente, previa citación al fiscal e integrada la tasa de justicia, archívese.

